

DIÁLOGOS. REVISTA ELECTRÓNICA DE HISTORIA

Escuela de Historia. Universidad de Costa Rica



Acciones colectivas en la sociedad costarricense 1998-2004. Sindy Mora Solano

Comité Editorial:

Director de la Revista Dr. Juan José Marín Hernández jmarin@fcs.ucr.ac.cr

Miembros del Consejo Editorial: Dr. Ronny Viales, Dr. Guillermo Carvajal, MSc.
Francisco Enríquez, Msc. Bernal Rivas y MSc. Ana María Botey

Miembros del Consejo Asesor Internacional: Dr. José Cal Montoya, Universidad de San Carlos de Guatemala; Dr. Juan Manuel Palacio, Universidad Nacional de San Martín y Dr. Eduardo Rey, Universidad de Santiago de Compostela, España

Dirección web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm>
(Página 223 de 253) p. 223

Palabras claves:

Acciones colectivas, movimientos sociales, Costa Rica, conflictividad social

key words:

Collective actions, social movements, Costa Rica, social conflicts

Resumen

El artículo analiza las acciones colectivas desarrolladas entre 1998 y 2004 como parte de un interesante proceso de transición del sistema de partidos políticos y de la participación electoral. En este contexto, la autora desarrolla una serie de preguntas de investigación, entre ellas: ¿son los motivos políticos los que predominan en las acciones colectivas de protesta en Costa Rica?, ¿cuál es el significado de estas acciones en el contexto político de la Costa Rica actual?, ¿qué caracteriza al repertorio de protesta social costarricense?, ¿cuáles son los actores que protagonizan las acciones colectivas?, ¿cuáles son sus demandas y a qué entidades se dirigen?

La respuesta a dichas preguntas llevan a la autora a cuestionar la concepción dominante de la política, entendida esta como una institucionalización y normatividad. Por el contrario, la autora descubre la centralidad de los conflictos gestados dentro y fuera de las denominadas instancias formales. Por ello, el artículo resulta una interesante invitación a descubrir dentro del repertorio de acciones colectivas diversas formas participación política, de un país con una gran tradición histórica en la protesta social.

Abstract

The article analyzes the collective actions that took place between 1998 and 2004 as a part of an interesting transition process of the system of political parties and voter turnout. In this context, the author presents a series of questions for analysis. Among these are the following: Are the political motives the predominant element in the collective protest activities in Costa Rica? What is the meaning of these actions in the political context of present day Costa Rica? What characterizes the Costa Rican social protest repertoire? Who are the main actors in the collective actions? What do they demand and what entities do they target?

The answers to these questions lead the author to debate the prevailing perception of politics, when understood as its institutionalization and establishment of norms. On the other hand, the author discovers the centrality of the conflicts originated inside and outside of the so-called formal entities. Hence, the article poses an interesting invitation to discover a variety of forms of political participation within the ample repertoire of collective actions that take place in a country with a great historical tradition as refers to social protest.

Sindy Mora Solano. Licenciada en sociología. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica.

Acciones colectivas en la sociedad costarricense 1998-2004¹.

Lic. Sindy Mora Solano

El 3 de diciembre del 2005, el Diario Extra reportó una protesta poco usual en términos del repertorio de las acciones colectivas a las que recurren en Costa Rica los actores sociales. Armados de jabón, un grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica ingresó en la fuente de la Hispanidad y lavó la bandera nacional. Los motivos de esta acción de protesta fueron los escándalos de corrupción que abatieron al país a finales del 2004. De la misma forma, los estudiantes expresaron el repudio por los intereses particulares en el ejercicio de gobernar y manifestaron su oposición a las negociaciones y tramitación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC) (²).

Meses antes, en octubre del 2004, La Nación reportó la demanda que un grupo de vecinos de San Carlos planteó al gobierno local. Ante los escándalos de corrupción del 2004, los vecinos de la localidad solicitaron a la Municipalidad de San Carlos revocar los acuerdos a través de cuales, los expresidentes Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres Olsen habían sido llamados “hijos predilectos del cantón de San Carlos” (³). Los manifestantes solicitaron a la Municipalidad quitar las placas en las que tal reconocimiento, se hizo público.

¹ La elaboración del Manual de codificación de la base de datos de acciones colectivas y la recolección de la información que sirve de insumo para la elaboración de la siguiente reflexión son productos de un trabajo también colectivo. En este trabajo institucional se involucraron distintos investigadores del Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible y del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. En la elaboración del Manual de codificación participaron Sebastián Alfaro, Hannia Francheschi, Sindy Mora, Ana Rodríguez, Ciska Raventós, Jorge Vargas Cullel y Evelyn Villareal. En la recolección de la información participaron Mónica Acosta, Sebastián Alfaro, Sindy Mora y Esteban Sánchez.

² Hernández, Paola: 3 de diciembre de 2005. “Lavaron la bandera de Costa Rica”. En: Diario Extra, <http://www.diarioextra.com/2005/diciembre/03/nacionales11.php>.

³ Hernández, Carlos: 31 de octubre de 2004. “Sancarleños piden retirar placas de expresidentes”. En: La Nación Digital, http://www.nacion.com/ln_ee/2004/octubre/31/pais3.html

Estas acciones ilustran los principales interrogantes que dan origen a esta reflexión: ¿son los motivos políticos los que predominan en las acciones colectivas de protesta en Costa Rica?, ¿cuál es el significado de estas acciones en el contexto político de la Costa Rica actual?, ¿qué caracteriza al repertorio de protesta social costarricense?, ¿cuáles son los actores que protagonizan las acciones colectivas?, ¿cuáles son sus demandas y a qué entidades se dirigen?

El estudio sobre las acciones colectivas entre los años 1998 y 2004, se inserta en un periodo de transición del sistema de partidos políticos y de la participación electoral. En este contexto, quizá uno de los eventos políticos más importantes fue la firma del Pacto Figueres-Calderón. Anunciado el 28 de abril y firmado el 12 de junio de 1995 bajo el nombre de “Acuerdo Nacional” (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 1995), dicho pacto evidenció el interés de las cúpulas de los partidos mayoritarios por reformar el Estado costarricense.

Mientras este Pacto se firmaba, el país vivía uno de los más importantes ciclos de acción colectiva de los últimos años: la huelga del Magisterio Nacional. En el contexto de reducción del gasto público, la Administración Figueres Olsen (1994-1998) puso en corriente legislativa el Proyecto de ley de Normalización y Sostenibilidad de los Regímenes de Pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, proyecto buscaba establecer una menor contribución por parte del Estado al régimen de pensiones, con una mayor cotización por parte de los educadores (⁴). A pesar de las diversas acciones realizadas en señal de oposición al proyecto, éste fue aprobado el 9 de julio de 1995, lo que implicó un incremento de la protesta social, cuya principal demanda -más no la única- fue la derogación de la Ley de Pensiones N° 7531.

⁴ Menjivar, Mauricio: 1999 “La Otra Sociedad Civil: Acción Política Magisterial entre la Hegemonía y la Alteridad”. Tesis presentada para optar por el grado de Magíster Scientae en Ciencias Políticas. (San Pedro: Universidad de Costa Rica), p.30

Antes de la aprobación de esta ley, se dieron varios acercamientos entre las dirigencias sindicales y los representantes gubernamentales. Sin embargo, el 28 de junio de 1995 se rompieron las negociaciones. Los educadores señalaron como motivos de la ruptura, la firma del Pacto Figueres-Calderón que desconoció las negociaciones previas entre el gobierno y los educadores, lo que implicó el rechazo de las propuestas de los últimos para solucionar el conflicto. La solución dada a la huelga del Magisterio de 1995 demostró que a pesar de que el Pacto Figueres-Calderón apeló a un diálogo permanente y sincero entre los representantes de los distintos intereses del país, las demandas magisteriales no fueron integradas en lo negociable, por lo que el llamado a la concertación, en la realidad se convirtió en una práctica de exclusión social y política (⁵).

La firma del Pacto Figueres-Calderón fue la expresión de los arreglos entre el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), arreglos partidarios que no dejaron de ser percibidos como tales por el electorado costarricense. Según Raventós et al, el aumento observado en el abstencionismo de la elección de 1998 estuvo asociado a motivaciones políticas, en donde el malestar con la política y el distanciamiento del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) fueron las principales razones para ausentarse de las urnas electorales (⁶).

Mientras que el incremento del abstencionismo en las elecciones celebradas entre 1986 y 1994 se concentró en los niveles socioeconómicos más altos, en 1998 el aumento en la abstención se generalizó independientemente de las condiciones económicas. Este incremento de la abstención en todos los niveles socioeconómicos, en todas edades y en ambos sexos evidenció un quiebre de las tradiciones políticas asociadas al bipartidismo, con lo cual “los gobiernos de los “hijos de los caudillos” parecen haber cerrado el ciclo

⁵ Hernández, Gerardo: 2000 “El discurso del Pacto Figueres-Calderón. Un ejercicio de análisis estructural del discurso” En: Pochet, Rosa María, comp. *Discurso y análisis social. Métodos cualitativos y técnicas de análisis*. (San Pedro: Editorial de la Universidad de Costa Rica), p.244

⁶ Raventós, Ciska; Ramírez, Olman; Gutiérrez, Ana Lucía; García, Raúl: 2005 *Abstencionistas en Costa Rica ¿Quiénes son y por qué no votan?* (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, IIDH CAPEL, Tribunal Supremo de Elecciones), p. 149

político que iniciaron sus padres en la década de 1940” (7). No obstante, la situación no fue la misma para la elección del 2002, cuando la relación entre condiciones económicas y abstención se hizo evidente, al dejar de votar quienes se encontraban inscritos en los distritos con menor nivel socioeconómico. En los resultados de esta elección jugó un papel muy importante el Partido Acción Ciudadana (PAC), que atrajo a los electores de mayor nivel educativo y mayor nivel socioeconómico a las urnas electorales (8).

Además del abstencionismo, las protestas de marzo del 2000 contra la aprobación de los proyectos de ley para el Mejoramiento de los Servicios Públicos de Electricidad y Telecomunicaciones y de la Participación del Estado, -proyectos conocidos como Combo ICE- son de importante consideración. Estas protestas fueron identificadas como la máxima expresión del malestar costarricense contra los arreglos partidarios e inconstitucionales de la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional en el espacio legislativo (9).

Si bien las protestas contra el Combo ICE han sido identificadas como el contexto en donde por primera vez en la historia reciente del país se desarrolló un discurso dirigido contra la “clase política” (10), a manera de hipótesis se puede plantear que éste término tuvo su gestación en el contexto de la firma del Pacto Figueres-Calderón y la huelga del Magisterio Nacional (11) eventos políticos y simbólicos que incidieron en los resultados electorales de 1998.

⁷ Raventós, Ciska; Ramírez, Oltman; Gutiérrez, Ana Lucía; García, Raúl: 2005 *Abstencionistas en Costa Rica ...*, p.207

⁸ Raventós, Ciska; Ramírez, Oltman; Gutiérrez, Ana Lucía; García, Raúl: 2005 *Abstencionistas en Costa Rica ...*p.218

⁹ Solís, Manuel 2002 “Entre el cambio y la tradición: el fracaso de la privatización de la energía y las telecomunicaciones en Costa Rica” En: Revista de Ciencias Sociales, N° 95. Número 1

¹⁰ Alvarenga, Patricia: 2005 De vecinos a ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica. (San Pedro: Editorial de la Universidad de Costa Rica y Editorial de la Universidad Nacional), p. 295

¹¹ Gutiérrez, Ana Lucía; Raventós, Ciska; Sandoval, Carlos: 1996 Voces de la huelga: Testimonios de maestras(os) y profesoras(es) sobre el movimiento magisterial de julio a setiembre de 1995. (San Pedro: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica y Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica).

En el presente trabajo busco mostrar como la insatisfacción con la política, se ha hecho acompañar de un proceso de deterioro de las condiciones económicas, de la calidad y costo de los servicios y de la reducción del gasto público, que tiene su expresión en distintas acciones colectivas de protesta.

Haciendo eco de las palabras de González y Solís, las acciones colectivas reportadas en la prensa escrita permiten hablar de un malestar que se expresa más allá de indicadores de abstencionismo o las protestas contra el Combo ICE, siendo un malestar que se desborda cotidianamente. Lejos de creer que acciones colectivas como las marchas o los bloqueos “son señal de una sociedad cada vez más pobre en recursos políticos para establecer algunos nortes consensualmente” ⁽¹²⁾, esta reflexión parte del supuesto de reconocer al repertorio de la protesta social, como una variante medular de la cultura política costarricense, en la búsqueda de construir consensos políticos.

¿Por qué analizar las acciones colectivas?

El debate sobre las acciones colectivas y los movimientos sociales es abundante. Una de las primeras corrientes teóricas que planteó el tema de la acción colectiva y de los grupos de presión fue la que posteriormente se denominó **Teoría de la Elección Racional** o “Rational Choice”. Formulada desde una perspectiva económica en los años sesenta del siglo pasado, uno de sus principales exponentes fue Mancur Olson. Desde su perspectiva, la acción colectiva puede ser explicada gracias al comportamiento racional de los grupos de presión y la existencia de incentivos para la participación. De esta forma, los

¹² González Alfonso; Solís, Manuel: 2001 Entre el desarraigo y el despojo...Costa Rica en el fin de siglo. (San Pedro: Editorial de la Universidad de Costa Rica), p.443

incentivos que estimularon la participación fueron considerados los elementos centrales de la explicación del comportamiento colectivo (¹³).

Si bien la racionalidad puede ser una dimensión del actuar en grupos, esta dimensión no es la única, por lo que la teoría de la Elección Racional fue criticada de reducir las motivaciones de los grupos a incentivos y ganancias, olvidando los procesos identitarios previos y que surgen al participar en acciones colectivas (¹⁴). A pesar de las críticas lanzadas contra este enfoque teórico, la teoría de la elección racional fue central para potenciar el surgimiento de otras matrices desde las que entender las acciones colectivas y los movimientos sociales, ya fuera para servirse de sus postulados o para refutarlos. A continuación señalo al menos tres de estas corrientes.

En primer lugar, la teoría de la **Movilización de Recursos** puso el énfasis en las estrategias de la acción, haciendo suyo, pero a la vez problematizando el supuesto del actor racional del Rational Choice. Esta corriente se centró en el estudio de los recursos materiales, humanos, cognitivos y técnicos, disponibles para actuar colectivamente. Un segundo enfoque fue conocido como la teoría de los **Nuevos Movimientos Sociales**, que recuperó del marxismo la idea del conflicto social y de Weber la definición de actor, poniendo énfasis en el estudio de los nuevos conflictos surgidos en las sociedades post-industriales. Al no encontrarse anclados únicamente en el ámbito laboral, los nuevos movimientos sociales fueron explicados por la irrupción de nuevas identidades, en donde el principal vector de la acción es la identidad. Un esfuerzo de síntesis de ambas aproximaciones fue realizado por los representantes de la teoría de la **Estructura de las Oportunidades Políticas**, que buscó analizar la acción colectiva a partir de las

¹³ Olson, Mancur: 1992 *La lógica de la Acción Colectiva. Bienes Públicos y la Teoría de Grupos*. (México: Editorial Limusa), p. 70

¹⁴ Marx, Myra: 1992 "The Political Context of Rationality: Rational Choice Theory and Resource Mobilization" En: Morris et al, (comp.) *Frontiers in Social Movements Theory*. (Yale University Press), p. 34

oportunidades o restricciones que la posibilitan o la impiden, considerando no solo los recursos, sino también las identidades que surgen de y en la acción (¹⁵).

Por diversas razones en América Latina predominó el estudio de los movimientos sociales, en contraposición a un enfoque que tuviese como objetivo el estudio de las acciones colectivas¹⁶. Sin embargo, la apuesta por los movimientos sociales como unidad analítica -apuesta que también asumió la academia costarricense-, no aseguró el desarrollo de una corriente permanente de estudio sobre los movimientos sociales.

En primer lugar, esto se debió a que el tema de los movimientos sociales nunca fue un problema de estudio estrictamente académico. La organización, los movimientos sociales y su incidencia política fueron objeto de estudio de investigaciones realizadas para y con las organizaciones sociales. En este sentido, existió una debilidad institucional para asumir el tema de los movimientos sociales desde una perspectiva académica, lo que permitió la constitución de las organizaciones no gubernamentales como espacios de investigación -acción¹⁷.

Lo anterior no implicó la inexistencia de investigaciones importantes en cuanto al estudio de los movimientos sociales. Sin embargo, estas investigaciones fueron pocas. Especialmente predominaron los estudios sobre las luchas por el acceso a vivienda y las luchas campesinas por el derecho a producir. Aquí destacan las investigaciones realizadas

¹⁵ Edelman, Marc: 2005 *Campesinos contra la globalización. Movimientos sociales rurales en Costa Rica*. (San Pedro: Editorial de la Universidad de Costa Rica), p. 288-290

¹⁶ Edelman ha señalado que el desarrollo de los regímenes dictatoriales en América Latina hizo poco atractivo el cuestionamiento sobre las oportunidades para la participación política, en momentos en donde tales oportunidades se encontraban absolutamente restringidas. Por otra parte, los vínculos entre académicos europeos y latinoamericanos influyeron en el desarrollo del enfoque de los Nuevos Movimientos Sociales, en contraposición de otras aproximaciones teóricas. Conviene recordar la presencia de Alain Touraine en los años 50's en la Universidad de Chile, lo que sin lugar a dudas influyó en el debate y las investigaciones realizadas sobre el tema. Finalmente, los académicos latinoamericanos fueron portadores del desprecio hacia cualquier producto de la sociedad estadounidense, lo que no fue la excepción con las teorías de la acción colectiva (Edelman, 2001: 292).

¹⁷ Desde la sociología, el estudio de los movimientos sociales tuvo más valor político que académico. La existencia del Centro de Estudios para la Acción Social (CEPAS) es quizá el ejemplo más emblemático de esta afirmación, en donde el conocimiento sociológico fue utilizado para mediar en la constitución de sujetos políticos (Conversación con Ciska Raventós, ex integrante de CEPAS).

por Román sobre los estilos de negociación política de las organizaciones campesinas (¹⁸), la investigación sobre los movimientos sociales rurales realizada por Edelman (¹⁹) y las investigaciones relacionadas con las luchas pro-vivienda realizadas por Molina (²⁰) y Sagot (²¹). También destacan dentro de este conjunto de investigaciones, los trabajos de Daniel Camacho (²²).

Un segundo aspecto que explica la ausencia de investigaciones sociológicas sobre el tema, fue el aumento de la conflictividad social vivida en los años ochentas, producto de la crisis económica y la aplicación de medidas de ajuste estructural. Esta intensificación de la conflictividad se expresó en demandas relacionadas con la satisfacción de la necesidad de vivienda y contra el alza de los precios y mejora en la calidad de los servicios públicos como el agua y la electricidad (²³). El involucramiento de sociólogos al estudio y acompañamiento de los movimientos sociales se dio en este contexto, siendo las movilizaciones de la época expresión de la permanencia de una fuerte base organizacional (²⁴).

Sin embargo, el debilitamiento que sufrieron las organizaciones sociales a partir de la Administración Arias Sánchez (1986-1990), no solo se tradujo en un descenso de la movilización, sino también en un alejamiento de la sociología al tema. La Administración

¹⁸ Román, Isabel: 1993 “Estilos de negociación política de las organizaciones campesinas en Costa Rica durante la década de los ochentas”. Tesis presentada para optar por el grado de Magíster Scientae en Sociología. (San Pedro: Universidad de Costa Rica).

¹⁹ Edelman, Marc: 2005 *Campesinos contra la globalización. Movimientos sociales rurales en Costa Rica*. (San Pedro: Editorial de la Universidad de Costa Rica).

²⁰ Molina Eugenia: 1990 “Repercusiones político-organizativas del acuerdo político firmado entre los frentes de vivienda y el Estado durante la Administración Arias Sánchez”. Tesis presentada para optar por el grado de Magíster Scientae en Sociología. (San Pedro: Universidad de Costa Rica).

²¹ Sagot, Montserrat: 1999 “Democracia, participación política e identidades fragmentadas: el caso de las mujeres en la lucha por vivienda en Costa Rica” En: Ivonne Sui Bermúdez, et al (compiladora) *Antología Latinoamericana y del Caribe. Mujer y género* Volumen II.

²² Camacho, Daniel: 1985. *Movimientos Sociales. Algunas discusiones conceptuales. Avances de Investigación*. No. 54. (San Pedro: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica) y Camacho, Daniel: 1986. *Movimientos Sociales en Costa Rica*. (San Pedro: Universidad de Costa Rica).

²³ Valverde, José Manuel et al: 1989 “Costa Rica: movimientos sociales populares y democracia” En: Rojas, Manuel (coordinador) *Costa Rica: la democracia inconclusa*. (San José: Departamento Ecuménico de Investigación)

²⁴

liberacionista de Luis Alberto Monge había ensayado una estrategia poco fructífera en la resolución de conflictos, que terminó por recrudecer la protesta social. Esta estrategia consistió en adoptar “compromisos con las organizaciones populares que luego de pasado cierto tiempo, simplemente ignoró” (25). No obstante, la Administración Arias Sánchez introdujo variaciones en esta estrategia, logrando desmovilizar a las organizaciones sociales.

Específicamente, en el periodo 1986-1990 la conflictividad social fue canalizada e institucionalizada, convirtiéndola en un insumo de las políticas impulsadas por el gobierno, políticas que a su vez se veían libradas de la protesta social. Como señaló Edelman a propósito de las organizaciones campesinas “el solo hecho de que el Gobierno reconociera a las organizaciones sociales como interlocutores válidos, creó mecanismos formales institucionales para consultas sobre políticas macroeconómicas y sobre precios, programas de extensión, mercadeo y conflictos agrícolas” (26) que redujeron las medidas campesinas de protesta. Fue así como, con diversas estrategias de esta índole, la capacidad de incidencia de las organizaciones se vio profundamente debilitada.

Finalmente, un cuarto elemento que incidió en el abandono del tema de los movimientos sociales por parte de los sociólogos fue el progresivo desfinanciamiento de las organizaciones no gubernamentales, vivido a finales de los ochentas y principios de los noventas. Ante la desintegración de las organizaciones sociales y la reducción del financiamiento europeo de las ONG's, el tema de los movimientos sociales dejó de formar parte del interés de los sociólogos en los años 90. En los últimos 5 años las investigaciones sobre el tema han sido escasas. Las movilizaciones sociales como la del Combo ICE se han estudiado de forma indirecta, ya que se analiza el papel de los medios

²⁵ Valverde, José Manuel et al: 1992 “Política económica, movimientos sociales y política social: 1980-1988” En: *Contribuciones*. Nº 14, p.9

²⁶ Edelman, Marc: 2005 *Campesinos contra la globalización. Movimientos sociales rurales en Costa Rica*. (San Pedro: Editorial de la Universidad de Costa Rica), p.316

de comunicación o de los representantes de la Iglesia Católica en el desarrollo de estas coyunturas²⁷.

Ahora bien, desde la sociología son escasas las investigaciones cuya unidad analítica sea la acción colectiva²⁸. En este sentido, el compromiso no solo epistemológico sino también político puesto en el análisis de los movimientos sociales impidió ver que de acuerdo a las oportunidades y restricciones políticas, los grupos organizados formal o informalmente, que no se articulaban o constituían como movimientos sociales, también tenían demandas que plantear. De esta forma, la acción colectiva entendida como “el principal recurso y con frecuencia el único, del que dispone la mayoría de la gente para enfrentarse a adversarios mejor equipados o a Estados poderosos” (²⁹), es un concepto alternativo que permite analizar las acciones de protesta de aquellos que no necesariamente se vinculan a movimientos sociales.

Un movimiento social supone la existencia de redes de actores que comparten desafíos colectivos y protagonizan acciones políticas para ver satisfechas sus demandas. Por esta razón, la permanencia de las acciones es un requisito indispensable de un movimiento social. En contraposición, una acción colectiva no necesariamente se encuentra vinculada a un movimiento social, por lo que puede ser espontánea, esporádica o discontinua, involucrando a grupos sociales que no siempre se identifican como actores políticos (³⁰).

Mientras que el concepto de movimiento social refiere al nivel de la organización con una mayor permanencia temporal, el concepto de acción colectiva refiere al nivel de las

²⁷ El Combo ICE ha sido el ciclo de acción colectiva más estudiado en los últimos años. Desde la perspectiva sociológica es importante destacar el trabajo de Fonseca titulado “Privatización y prensa escrita en Costa Rica. El caso del COMBO ICE” del año 2003 y la investigación de Artavia “Iglesia y conflicto social: el discurso de los obispos frente al “Combo ICE”” del 2004. Desde la óptica de la comunicación colectiva se encuentra la investigación de Martín “El Combo del ICE y La Nación: Análisis para un periodismo socialmente responsable” también del 2004.

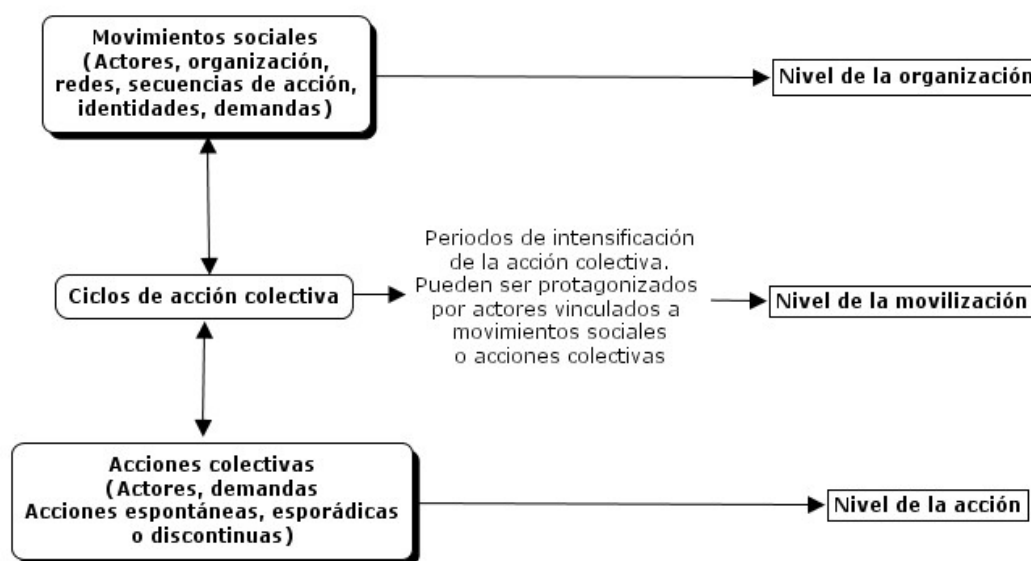
²⁸ El antecedente inmediato de esta reflexión son las investigaciones que Hannia Francheschi realizara para el Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible en el 2002 y 2003.

²⁹ Tarrow, Sydney: 2004 (1998) *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. (Madrid: Alianza Editorial), p.24

³⁰ Tarrow, Sydney: 2004 (1998) *El poder en movimiento....*, p 26

prácticas de protesta social, como lo son las huelgas, el paro de labores, las marchas, las declaraciones públicas, las amenazas, los bloqueos y las huelgas de hambre, entre otras acciones. Si bien los actores vinculados a un movimiento social pueden protagonizar acciones colectivas, en sentido inverso, una acción colectiva no puede ser considerada por sí sola como un movimiento social, como lo muestra el diagrama 1.

Diagrama 1
Movimientos sociales y acciones colectivas como unidades analíticas



Fuente: Elaboración a partir de Tarrow, Sidney: (2004) 1998 El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política (Madrid: Alianza Editorial)

La riqueza del concepto de acciones colectivas reside en su carácter menos restrictivo en relación a los movimientos sociales, en el sentido de que permite registrar una serie de acciones y diversidad de actores, que se organizan para plantear las demandas a las entidades que consideran pertinentes, sin que necesariamente exista una organización formal o permanente que las potencie. Por ello, el presente es un esfuerzo por aproximarse a la protesta social, mediante la acción colectiva como unidad analítica, y no a través del nivel de la organización o los movimientos sociales.

Dirección web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm>

(Página 235 de 253) p. 235

La reflexión sobre las acciones colectivas que presento seguidamente se ha reconstruido a partir del Diario Extra y La Nación³¹. Sin lugar a dudas, las fuentes a partir de las cuales se reconstruye la acción colectiva costarricense suponen un sesgo no solo por el tipo de actores y demandas que se registran, sino por la cobertura territorial de ambos medios. Sin embargo, las dificultades para obtener registros alternativos de las acciones colectivas realizadas por los actores sociales son múltiples, ya que estos no construyen memorias de las acciones y los logros alcanzados. Por supuesto, esta no es solo una limitación metodológica para el estudio de las acciones colectivas, sino también una limitación de las organizaciones y los actores colectivos para pensar y pensarse políticamente.

³¹ Metodológicamente, primero se procedió a la construcción de una base de datos de noticias sobre acciones colectivas, para posteriormente crear una base de datos de acciones colectivas. En esta segunda base de datos se evitan las duplicaciones de acciones reportadas por ambos medios.

Acciones colectivas en Costa Rica: un proceso y dos ciclos de acción colectiva

A pesar de las limitaciones de una base de datos construida a partir de lo reportado por La Nación y Diario Extra, debido a las posiciones ideológicas de ambas fuentes, los resultados obtenidos hasta el momento muestran un estado permanente de expresión de demandas mediante el recurso de la acción colectiva.

Cuadro 1

Total de acciones colectivas en Costa Rica, 1998-2004															
Números absolutos y relativos															
1998	%	1999	%	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	Total	%
342	11.4	351	11.7	613	20.4	328	10.9	303	10.1	417	13.9	648	21.6	3002	100

Fuente: Elaboración a partir de La Nación y Diario Extra

Como se observa en el cuadro 1, entre 1998 y el 2004 se reportaron un total de 3002 acciones de protesta, siendo el 2000 y el 2004 los años en los que se registra un aumento significativo del malestar, lo que representó un 20.4% y 21.6% de las acciones. En estos dos años se desarrollaron los ciclos de acción colectiva contra la aprobación del Combo ICE en marzo del 2000 y la solicitud de eliminación del monopolio de Riteve, empresa encargada de la revisión técnica vehicular. A las protestas contra Riteve de agosto del 2004, se unieron demandas relacionadas con el aumento de los salarios del sector público, medidas concretas para enfrentar el alto costo de la vida, así como la negativa a la tramitación y ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (TLC). Estos ciclos de acción colectiva, entendidos como periodos de intensificación de la protesta social (³²), permiten describir las acciones colectivas del periodo como un solo proceso de protesta con dos momentos en el que se incrementa la conflictividad social, en donde la participación se expandió de los actores más movilizadas a los menos movilizadas.

Ambos ciclos reflejan una transición importante en el proceso de construcción de agendas y alianzas políticas. Si se toma como punto de partida las acciones emprendidas por el

³² Tarrow, Sydney: 2004 (1998) *El poder en movimiento...*, p. 202.

Frente de Organizaciones Magisteriales (FOM) y el Comité Cívico Nacional en la huelga del Magisterio de 1995, la alianza desarrollada entre los sindicatos del sector público fue una alianza de carácter gremial. Esto, a pesar del señalamiento de que en la huelga de 1995 no se incluyeron únicamente las reivindicaciones de los educadores, tratándose de una lucha “de grandes sectores de la población contra las políticas de ajuste estructural” (Cedeño, 1995: 115). Sin embargo, en sentido estricto, la huelga de 1995 no logró hacerse extensiva a otros actores que no eran los trabajadores del sector público o alimentar demandas de una naturaleza radicalmente distintas a las planteadas.

El panorama es distinto si se emprende el análisis del año 2000. En ese ciclo de acción colectiva, Costa Rica experimentó la construcción de demandas de carácter nacional, con una alianza de actores muy diversos. En el 2004, las demandas articuladas fueron de carácter gremial y nacional, con el establecimiento de una alianza de los trabajadores del sector público, los productores agrícolas de San Ramón, los estudiantes universitarios y el involucramiento de actores no tradicionales, como lo fueron la Cámara Costarricense de Transportistas Unitarios (Mora, 2005).

El repertorio de la protesta social costarricense, es decir, el tipo de acciones a las que culturalmente recurren los actores colectivos para plantear sus demandas, incluyen las modalidades que aparecen en el cuadro 2. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, en la construcción cultural de la protesta costarricense fueron predominantes dos tipos de acciones: la declaración pública y el bloqueo.

En el periodo estudiado se registraron un total de 978 declaraciones públicas, acciones que incluyen todo lo dicho a través de conferencias de prensa, declaraciones a medios de comunicación, boletines, manifiestos públicos, peticiones por escrito, y otros medios de acceso no restringido, acciones que son registradas por los medios periodísticos consultados. Para la utilización de la amenaza, un tipo de declaración pública cuya finalidad es condicionar la utilización de medidas de protesta a cambio de la resolución de las demandas, los medios reportaron un número menor de acciones.

Por su parte, en el periodo se registraron un total de 626 bloqueos, siendo el 2000 y el 2004, los años en que predominó el uso de este instrumento. Ahora, si se toma en su conjunto el uso de la calle como estrategia de protesta, la marcha, el mitín y el bloqueo -

Dirección web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm>

(Página 238 de 253) p. 238

1065 acciones en total- superaron la utilización de la palabra o declaración pública como medio de comunicación con las entidades consideradas competentes en la solución del conflicto. La predominancia del bloqueo en el 2000 y el 2004 muestra como estas acciones se encontraron relacionadas con los ciclos de acción colectiva, ya que en los años en que la intensificación de la protesta disminuyó, el uso del bloqueo también.

Cuadro 2

Repertorio de acciones colectivas en Costa Rica 1998-2004								
Números absolutos								
Tipo de acciones	Años							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total
Declaración pública	113	130	149	73	101	138	274	978
Denuncia ante entidades	24	1	8	11	11	46	8	109
Amenaza	20	23	20	5	9	10	30	117
Marcha	15	19	23	34	20	37	50	198
Mitín	51	40	55	19	11	33	32	241
Bloqueo	31	51	266	73	75	10	120	626
Paro	24	11	13	41	16	27	38	170
Huelga	8	11	9	5	2	15	6	56
Huelga de hambre	1	2	3	1	2	1	1	11
Invasión de propiedad	5	9	5	5	3	3	3	33
Actos contra la propiedad	0	2	5	1	0	2	5	15
Reunión con autoridades	42	41	45	41	47	66	64	346
Reunión o asamblea	8	10	10	7	6	28	15	84
Plebiscito	0	0	0	0	0	1	2	3
Otros	0	1	2	12	0	0	0	15
Total	342	351	613	328	303	417	648	3002

Fuente: Elaboración a partir de La Nación y Diario Extra

Es interesante señalar que a pesar del incremento de las acciones colectivas en el 2000 y el 2004, los llamados a negociar se mantuvieron estables durante el periodo, aunque hubo una tendencia al aumento en los últimos dos años registrados para la administración Pacheco de la Espriella. Por su parte, las acciones como la huelga de hambre, la invasión de propiedad y los actos contra la propiedad fueron instrumentos de protesta de poca recurrencia por parte de los actores colectivos.

Ahora, los protagonistas de estas acciones colectivas fueron los trabajadores, principalmente del sector público, como lo evidencia el cuadro 3. En total, un 42.7% de las acciones se registraron para los trabajadores, porcentaje que fue seguido por la participación de los vecinos, con un 11% de las acciones. Determinado por las protestas contra la revisión técnica vehicular, para los empresarios se registró un 7% de las medidas.

En donde se hace más evidentes los problemas de subregistro de las acciones colectivas es en el caso de los grupos pro-vivienda. Según un reportaje de La Nación titulado “Precaristas invaden un terreno cada cuatro días” (³³), sólo en el 2004 fueron presentadas 1062 denuncias por el delito de usurpación de tierras. De esta forma, el 1.7% de las acciones atribuidas a este tipo de actor colectivo en el cuadro 3, es una cifra que oculta el problema de acceso a vivienda que enfrentan determinados sectores y la ausencia de políticas claras para solucionar este problema.

Los productores agropecuarios y los trabajadores del sector informal fueron los responsables del 5.6% y 4.2% de la protesta, siendo los suyos como nuestro más adelante, conflictos que atraviesan a la sociedad costarricense actual.

La identificación de los actores que se involucraron en acciones colectivas es central porque permite mostrar la participación de aquellos cuyas acciones, o son invisibilizadas por la prensa escrita, o transitan caminos formales que no necesariamente se convierten en

tema de noticia. Como permite afirmar el cuadro 3, para los grupos ambientalistas, los grupos de género, los grupos de derechos humanos, los grupos de usuarios y los indígenas se registraron los porcentajes más bajos de las acciones. El reducido porcentaje atribuido a los grupos anti-guerra –0.3% de la protesta-, muestra el ocultamiento por parte de La Nación y Diario Extra de la solicitud de rectificación del posicionamiento a la

³³ Vargas, Otto: 12 de junio de 2005. “Precaristas invaden un terreno cada cuatro días.” En: La Nación Digital http://www.nacion.com/ln_ee/2005/junio/12/pais0.html

invasión de Irak, que dio en nombre del país, el entonces presidente de la República, Abel Pacheco de la Espriella.

Cuadro 3

Tipo de actor que participa en las acciones colectivas, según año. Costa Rica 1998-2004																
Números relativos y absolutos																
Tipo de actor	Años															
	1998	%	1999	%	2000	%	2001	%	2002	%	2003	%	2004	%	Total	%
Trabajadores	144	4.8	156	5.2	216	7.2	148	4.9	115	3.8	236	7.9	268	8.9	1283	42.7
Estudiantes de secundaria	36	1.2	10	0.3	25	0.8	11	0.4	6	0.2	16	0.5	18	0.6	122	4.1
Universitarios	12	0.4	12	0.4	28	0.9	4	0.1	1	0.0	5	0.2	18	0.6	80	2.7
Vecinos	56	1.9	40	1.3	43	1.4	52	1.7	23	0.8	51	1.7	66	2.2	331	11.0
Productores agropecuarios	11	0.4	22	0.7	39	1.3	28	0.9	31	1.0	17	0.6	20	0.7	168	5.6
Productores industriales	0	0.0	3	0.1	5	0.2	0	0.0	71	2.4	5	0.2	0	0.0	84	2.8
Empresarios	17	0.6	25	0.8	26	0.9	13	0.4	11	0.4	19	0.6	102	3.4	213	7.1
Grupos Ambientales	2	0.1	12	0.4	3	0.1	2	0.1	4	0.1	4	0.1	15	0.5	42	1.4
Grupos de Género	8	0.3	1	0.0	4	0.1	1	0.0	0	0.0	6	0.2	4	0.1	24	0.8
Grupos de Derechos humanos	1	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1	1	0.0	5	0.2
Grupos de Usuarios	2	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	8	0.3	4	0.1	16	0.5
Indígenas	6	0.2	6	0.2	1	0.0	5	0.2	2	0.1	8	0.3	2	0.1	30	1.0
Grupos Anti-guerra	0	0.0	0	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	6	0.2	0	0.0	8	0.3
Madres y padres	11	0.4	3	0.1	10	0.3	8	0.3	1	0.0	11	0.4	6	0.2	50	1.7
Trabajadores informales	15	0.5	5	0.2	15	0.5	26	0.9	14	0.5	9	0.3	42	1.4	126	4.2
Desempleados	0	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1
Extrabajadores	1	0.0	32	1.1	26	0.9	11	0.4	8	0.3	5	0.2	17	0.6	100	3.3
Jóvenes	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.1
Agrupaciones religiosas	0	0.0	4	0.1	1	0.0	2	0.1	0	0.0	0	0.0	4	0.1	11	0.4
Discapacitados	2	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.1	1	0.0	1	0.0	1	0.0	8	0.3
Privados de libertad	0	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.1	2	0.1	0	0.0	5	0.2
Grupos pro-vivienda	12	0.4	15	0.5	6	0.2	8	0.3	6	0.2	5	0.2	0	0.0	52	1.7
No registrado	5	0.2	4	0.1	162	5.4	4	0.1	4	0.1	0	0.0	60	2.0	239	8.0
Total	342	11.4	351	11.7	613	20.4	328	10.9	303	10.1	417	13.9	648	21.6	3002	100.0

Fuente: Elaboración a partir de La Nación y Diario Extra

Los que hablan mediante el bloqueo

De acuerdo con González y Solís, a finales del siglo en Costa Rica se articuló una retórica que dibujó un ambiente de inacción y parálisis en el funcionamiento de las instituciones estatales y en la gestión de los proyectos políticos de los grupos dominantes. En su afán de encontrar responsables, “la prensa escrita se orientó al papel de los grupos de presión para explicar la situación de inmovilidad e inercia en la que se encontraba el gobierno y el país”⁽³⁴⁾. Los trabajadores sindicalizados y todos aquellos que se opusieron a la apertura del mercado y por ende, a la modernización fueron identificados como los

³⁴ González Alfonso; Solís, Manuel: 2001 *Entre el desarraigo y el despojo...Costa Rica en el fin de siglo*. (San Pedro: Editorial de la Universidad de Costa Rica), p. 427

grupos de presión responsables de paralizar el país, discurso que ha omitido señalar qué intereses defienden estos grupos de presión y cómo esos intereses intervienen en la inmovilidad del país ⁽³⁵⁾.

El uso del bloqueo por parte de los actores colectivos formaría parte de este entramamiento de la sociedad costarricense. Es por ello que la identificación de los actores sociales que protagonizan los bloqueos en el país permite desmitificar la idea promovida por la prensa escrita de que los sindicalistas constantemente bloquean y paralizan el país. Anteriormente, la identificación del tipo de actores que participaron en las acciones colectivas permitió mostrar que el malestar de quienes recurren a las acciones de protesta no solo proviene de los trabajadores, de allí la importancia de mostrar que los bloqueos, en el periodo de estudio, no fueron de uso exclusivo por parte de tales actores.

Si bien la utilización del bloqueo tiene que ver no solo con la efectividad del corte del libre tránsito, bloquear las vías de comunicación terrestre supone la apropiación simbólica del espacio, en donde se busca trasladar la política institucionalizada a espacios comunes y más transitados, como son las calles del país. De esta forma, en muchas ocasiones el bloqueo se convierte en el único mecanismo para entablar el diálogo con las entidades gubernamentales competentes. Lo interesante en la utilización de este recurso reside no tanto en cuántos bloqueos se registran en un periodo, sino porqué este instrumento se convierte en el mecanismo de relacionamiento con las autoridades. Si bien por la naturaleza de las fuentes consultadas no es posible rastrear el surgimiento del conflicto que lleva a los actores colectivos a la decisión de utilizar el bloqueo, es importante indagar sobre los mecanismos institucionalizados o formales que se cierran antes de que el bloqueo se constituya en el medio para establecer procesos de negociación.

³⁵ González Alfonso; Solís, Manuel: 2001 *Entre el desarraigo y el despojo...*, p. 428

Partiendo del criterio de la estructuración espacial del conflicto, el cuadro 4 muestra la distribución de los bloqueos, de acuerdo a los actores que los utilizan. Una primera observación sobre el uso de los bloqueos es que este tipo de acción es frecuentada tanto por actores sumamente institucionalizados, como lo son los trabajadores organizados en sindicatos, como por actores organizados de manera más informal como lo podrían ser las madres y padres. De esta forma, este recurso no es dominio exclusivo de un tipo particular de actor, por lo que existen diversidad de actores y formas organizativas que hacen del bloqueo un instrumento propiedad de todos aquellos que tienen dificultad para sentarse en una mesa de negociación con representantes gubernamentales.

Cuadro 4

Uso del bloqueo en Costa Rica según actor colectivo 1998-2004								
Números absolutos								
Actores	Años							Total
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Trabajadores	5	4	33	20	1	4	20	87
Trabajadores informales	0	0	1	14	5	3	6	29
Extrabajadores	0	21	14	1	0	1	1	38
Estudiantes de secundaria	2	4	10	3	2	2	5	28
Universitarios	1	0	12	2	0	0	10	25
Vecinos	16	10	15	16	11	0	5	73
Grupos pro-vivienda	2	1	1	1	4	0	0	9
Madres y padres	3	3	2	3	0	0	0	11
Productores agropecuarios	1	5	18	12	5	0	1	42
Productores industriales	0	1	1	0	0	0	0	2
Empresarios	1	2	1	1	44	0	15	64
Indígenas	0	0	0	0	0	0	1	1
No registrado	0	0	158	0	3	0	56	217
Total	31	51	266	73	75	10	120	626

Fuente: Elaboración a partir de La Nación y Diario Extra

Como evidencia el cuadro 4, este tipo de acción fue mayormente utilizada en el contexto de los ciclos de acción colectiva. Tanto para el 2000 y el 2004 se registraron el mayor número de bloqueos del periodo, siendo los trabajadores y los actores no registrados por la prensa, los protagonistas de estas acciones. Debido a la intensificación de la protesta en

el 2000 y el 2004, en un total de 158 y 56 acciones respectivamente, las fuentes consultadas no lograron identificar a los actores colectivos. El uso de los bloqueos por parte de los universitarios se inscribe dentro de este contexto.

Pero no fueron sólo los trabajadores los que se apropiaron de la calle para asegurarse, el ser escuchados, ya que los vecinos y los empresarios se reservaron cifras significativas en el uso de los bloqueos. Los vecinos en la articulación de demandas de carácter local, como el arreglo de calles o de infraestructura de su comunidad y los empresarios, en oposición a la instalación y permanencia de Riteve como empresa con exclusividad sobre la revisión técnica vehicular del país. En 1999 y el 2000 el bloqueo fue utilizado principalmente por los extrabajadores bananeros afectados por el nemagón, mientras que en el periodo 1999-2001, los productores agrícolas recurrieron a este instrumento. Durante estos años, los productores de arroz y de cebolla se opusieron a la importación y descargue de estos productos provenientes de Estados Unidos y Canadá, solicitando el apoyo estatal a la producción nacional y la solución de los problemas crediticios con las entidades bancarias del país.

Los conflictos de la sociedad costarricense. “Un malestar que se desborda cotidianamente”

Los conflictos que atraviesan a la sociedad costarricense son diversos y mantienen una cierta permanencia en el periodo estudiado, lo que lleva a cuestionar la eficacia de las respuestas gubernamentales a las demandas planteadas por los actores colectivos.

Un análisis de las demandas expresadas sitúa la negativa a la aprobación del Combo ICE y la instalación de la revisión técnica vehicular en manos de Riteve, como los principales ejes del conflicto de la sociedad costarricense del periodo. Para el año 2000 y el 2004, se registraron un total de 10.4% y 7.4% demandas destinadas a expresar la oposición a leyes, reglamentos, actos o decretos ejecutivos, como lo muestra el cuadro 5.

Los conflictos de orden laboral se asociaron al aumento salarial, pero también a las demandas de convocatoria para las negociaciones salariales y a la oposición a los decretos ejecutivos, mediante los que se definieron las alzas salariales. El pago de salarios fue otra de las demandas centrales de los trabajadores. Quizá la lucha más significativa de este tipo fue la emprendida por los educadores en el 2003, debido al error en el sistema informático del Ministerio de Educación Pública (MEP), que impidió el pago a tiempo y completo de los salarios a los educadores.

Cuadro 5

Demandas expresadas en las acciones colectivas en Costa Rica 1998-2004								
Números relativos								
Demandas	Años							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total
Defensa del trabajo	2.1	3.3	3.8	4.0	2.4	3.4	4.3	23.3
Mejora en la calidad de los servicios	1.2	1.6	1.3	2.1	0.8	2.2	3.4	12.4
Participación en la toma de decisiones	1.0	0.9	1.0	0.7	0.8	1.4	2.0	7.7
Implementación u oposición a ley	2.8	2.3	10.4	1.9	4.3	1.6	7.4	30.7
Negativa a la aprobación de tratados	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.7	1.2
Intervención del gobierno	1.4	0.9	1.1	0.6	0.4	1.7	1.7	7.8
Defensa del ambiente	0.4	0.5	0.5	0.2	0.4	0.6	0.7	3.4
Defensa de derechos	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.9
Defensa de la educación	0.8	0.4	0.5	0.4	0.1	0.2	0.6	2.9
Privatización	0.4	0.2	0.3	0.5	0.0	0.1	0.0	1.4
Defensa de la producción agropecuaria	0.2	0.7	0.9	0.5	0.4	0.4	0.2	3.3
Cancelación o asignación de presupuesto	0.3	0.4	0.3	0.0	0.1	1.4	0.0	2.5
Mejora en la calidad de vida	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.5
Otras	0.5	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.6	2.1
Total	11.4	11.7	20.4	10.9	10.1	13.9	21.6	100.0

Fuente: Elaboración a partir de La Nación y Diario Extra

Las demandas laborales transitaron desde la defensa de las convenciones colectivas y las libertades sindicales, hasta la defensa del transporte informal y las ventas callejeras y ambulantes. Pero también los trabajadores organizados en sindicatos fueron los defensores de la institucionalidad en la que laboran. Fueron los trabajadores quienes hicieron suyas las demandas para evitar la reducción del presupuesto de las entidades públicas, o para impulsar las condiciones de infraestructura y calidad de los servicios

Dirección web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm>

(Página 245 de 253) p. 245

dados. Este tipo de acciones fueron frecuentes por parte de los trabajadores de la Unión de Empleados de la Caja (UNDECA), de los trabajadores del Ministerio de Salud, de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (ANEJUD), del Frente Interno de los Trabajadores (FIT) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), del Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP) y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). También este tipo de peticiones fueron defendidas por los Sindicatos Magisteriales, quienes solicitaron el giro de los recursos para los comedores escolares y contenido económico para llevar a cabo el Convenio Centroamericano de los 200 días lectivos, entre otros. La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) hizo suya esta demanda, solicitando la desretención del dinero destinado a la mejora de vías cantonales.

La oposición a la privatización fue también una petición de los trabajadores del sector público, quienes expresaron esta demanda en relación a la contratación de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), del Instituto Nacional de Seguros (INS) y de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se opusieron a la privatización, así como lo hicieron los trabajadores limonenses, en relación a los muelles administrados por la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). En el extremo opuesto a estas demandas se encontraron los principales defensores de la Ley de Concesión de Obra Pública.

Los productores agropecuarios demandaron el apoyo estatal a la producción, la defensa del producto y de los productores nacionales y la solución a los problemas crediticios y de remates de parcelas que el sector ha enfrentado con los bancos estatales. Estas demandas fueron expresadas por productores de palmito, la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ), la Cámara Nacional de Productores de Cebolla, la Cámara de Productores de la Región Caribeña, la Corporación Hortícola Nacional y la Unión de Productores Agrícolas (UPANACIONAL). Fueron los arroceros, quienes solicitaron al gobierno la aplicación de la cláusula XIX de la Organización Mundial del Comercio

Dirección web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm>

(Página 246 de 253) p. 246

(OMC) para la protección al productor nacional cuando bajan los precios internacionales, y también estos productores demandaron la defensa del sector agropecuario en las negociaciones del TLC.

En el plano de la informalidad se hicieron patentes tres grandes conflictos entre 1998 y el 2004. El primero de ellos fue el conflicto permanente entre taxistas formales, taxistas informales conocidos como “piratas” y portadores del servicio, que han convertido en interlocutores constantes a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Un segundo conflicto fue el de los extrabajadores afectados por el nemagón, quienes reclamaron una indemnización al Estado, tras los problemas de salud, como la infertilidad reproductiva, por la exposición a esta sustancia. Este conflicto ha sido dirimido en distintas instancias gubernamentales, como lo son el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. Finalmente, el conflicto de los vendedores ambulantes de la calle 8 en San José, quienes solicitaron la obtención de permisos para vender sus productos, mantuvo en constante confrontación a estos actores con la Municipalidad de San José. Preguntarse por el significado, las dificultades o facilidades de luchar desde condiciones de informalidad o ilegalidad, es un interrogante que sobrepasa esta reflexión, pero que resulta pertinente plantearse en futuras investigaciones.

Las acciones colectivas de la provincia de Limón merecen ser estudiadas con mayor profundidad, dado que estas son las únicas acciones que permiten hablar de demandas de carácter regional. Limón es el único lugar del país para el que se registraron demandas como la reactivación económica de la región, la mejora de los problemas sociales como la violencia y el desempleo, y la defensa del trabajo, haciendo un llamado especial a la creación de empleos. De la lectura de las fuentes periodísticas, habría que profundizar en la importancia de los sindicatos limonenses como la Federación de Trabajadores de Limón (FETRAL), el Sindicato de Trabajadores de la Junta de Administración Portuaria de la Vertiente Atlántica (SINTRAJAP), así como el Frente Limón en Lucha. Otros actores importantes de la dinámica colectiva de esta provincia fueron la Asociación de

Dirección web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm>

(Página 247 de 253) p. 247

Muelleros (ASOMUELLE) y la Asociación de Campesinos Limonenses (ASOCAL), quienes respectivamente han pedido al gobierno el pago de sus prestaciones, debido a los efectos causados por la apertura de la estiba y la entrega de la finca Júpiter, en el Valle de la Estrella, para cultivarla. Por la importancia económica de los puertos para el país, la campaña de desprestigio del movimiento sindical de los últimos años ha satanizado con mayor intensidad a los actores políticos limonenses, debido al impacto que sus acciones colectivas tienen en la economía nacional.

Parafraseando la interpretación de González y Solís, los últimos años de la Costa Rica actual son expresión no sólo de un desbordamiento del malestar, sino de una vivencia cotidiana del mismo, en donde en ocasiones el malestar tiende a ser invisibilizado. Expresiones como “en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang” ⁽³⁶⁾ forman parte del intento de ocultar, normalizar o banalizar los puntos del conflicto que atraviesan a la sociedad costarricense, en donde se responsabiliza de la situación del país, a aquellos que intervienen en la política, de manera inapropiada, mediante los recursos de la protesta social.

Sin embargo, la tesis de la suplantación o usurpación del poder por parte de los actores colectivos, obvia que los principales interpelados de la acción colectiva son los representantes de las entidades gubernamentales, como lo muestra el cuadro 6.

³⁶ Cortés, Carlos: 2004 (2000) *Cruz de olvido*. (Colombia: Editorial Alfaguara), p. 13
Dirección web: <http://historia.fcs.ucr.ac.cr/dialogos.htm>
(Página 248 de 253) p. 248

Cuadro 6

Entidades a las que se dirigen las acciones colectivas en Costa Rica 1998-2004								
Números absolutos								
Entidad	Años							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Total
Gobierno en general	2.3	4.1	9.7	4.0	3.6	5.2	8.5	37.4
Presidente de la República	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.7	0.7	3.4
Asamblea Legislativa	0.8	1.4	2.4	0.4	0.8	0.5	0.7	7.0
Instituciones descentralizadas	2.2	1.7	1.8	1.5	1.2	1.3	2.8	12.5
Ministerios	3.2	2.2	3.1	3.1	2.9	3.9	4.9	23.2
Poder Judicial	0.3	0.3	0.6	0.7	0.3	0.1	0.4	2.7
Defensoría de los Habitantes	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.5
Tribunal Supremo de Elecciones	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
Municipalidad	0.8	0.4	0.8	0.3	0.5	1.0	1.8	5.5
Empresas	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.6	0.4	2.7
Iglesia Católica	0.2	0.2	1.3	0.2	0.3	0.4	0.0	2.6
Entidad de regulación	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	1.6
Entidad internacional	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2
Otras	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5
Total	11.4	11.7	20.4	10.9	10.1	13.9	21.6	100.0

Fuente: Elaboración a partir de La Nación y Diario Extra

Si bien se desconocen las principales respuestas dadas por estas entidades a las demandas expuestas -ya sea por una limitación de las fuentes periodísticas, ya sea por la ausencia de respuestas inmediatas o definitivas al conflicto-, la permanencia de muchos de los conflictos en las páginas de La Nación y Diario Extra hacen evidente la ausencia de acciones concretas para atender las peticiones de los actores. Esta incapacidad de respuesta muestra como detrás del malestar con la política y el abstencionismo, “hay una dosis de experiencia social y un resto de memoria” ⁽³⁷⁾ que constituyen y articulan las formas alternativas de participación política en la Costa Rica actual.

³⁷ González Alfonso; Solís, Manuel: 2001 *Entre el desarraigo y el despojo...Costa Rica en el fin de siglo.* (San Pedro: Editorial de la Universidad de Costa Rica), p.397

A manera de conclusión

¿Forman parte de la política costarricense las acciones colectivas de protesta? Para los entrevistados en la Encuesta Nacional de Abstencionismo³⁸, las manifestaciones de protesta, las luchas de la comunidad y los bloqueos en las calles no son parte de la política (³⁹). Si bien en Costa Rica existe un descrédito de los políticos y una insatisfacción con el incumplimiento de las promesas que los mismos hacen, no es la desconfianza en las entidades organizadoras del juego político-electoral las que están en cuestionamiento. Por el contrario entidades como el Tribunal Supremo de Elecciones gozan de una amplia legitimidad frente a la ciudadanía, lo que evidencia un gran respaldo a las concepciones de la política institucionalizada, a pesar de la desconfianza en la institucionalidad.

La concepción dominante de la política, entendida como institucionalización y normatividad, no es exclusiva de estos actores. El abordaje sociológico de la política se ha concentrado en las dinámicas más institucionalizadas, negando la centralidad de los conflictos que no necesariamente se gestan en instancias formales. Sin embargo, es necesario incluir el repertorio de acciones colectivas descrito en este trabajo, dentro las formas participación política, de un país con una gran tradición histórica en la protesta social.

Lejos de ser una reflexión acabada, el estudio de las acciones colectivas permite plantear una serie de preguntas relacionadas no solo con el objeto de estudio, sino también en relación con el abordaje, que las ciencias sociales han realizado sobre este objeto. Una preocupación más epistemológica y también más introspectiva posibilitaría entender el

³⁸ Encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, en el marco del proyecto de investigación Abstencionistas en Costa Rica ¿Quiénes son y por qué no votan? (Raventós et al, 2005: 127).

³⁹
Raventós, Ciska; Ramírez, Olman; Gutiérrez, Ana Lucía; García, Raúl: 2005 *Abstencionistas en Costa Rica ¿Quiénes son y por qué no votan?* (San José: Editorial de la Universidad de Costa Rica, IIDH CAPEL, Tribunal Supremo de Elecciones), p.127

proceso de alejamiento de los científicos sociales en la década de los años 90, no sólo de la investigación, sino también de la participación en movimientos sociales. Poco se sabe de la relación entre el estudio de los movimientos y el involucramiento e incidencia de los científicos sociales en los mismos. Como señalaba anteriormente, en el concepto de movimientos sociales hubo no solo una apuesta epistemológica, sino también una apuesta política, por ello el tema es relevante en términos de las agendas de investigación surgidas a partir de los noventas, así como en términos del tipo de disciplinas que construimos con nuestro quehacer.

Quizá en las actuales condiciones organizativas de los actores sociales costarricenses, el concepto de acciones colectivas permite aprehender con mayor facilidad lo que sucede actualmente en el país, aunque esto no niega la existencia de movimientos sociales. La firma del Pacto Figueres-Calderón, el aumento del abstencionismo en la elección de 1998, la huelga del Magisterio Nacional y las protestas contra el Combo ICE y Riteve en el 2000 y el 2004, forman parte de la expresión del malestar con el bipartidismo y el desempeño de la política institucionalizada. De esta manera, las movilizaciones de la última década hacen que la disyuntiva conceptual entre organización (nivel de los movimientos sociales) y movilización-acción (nivel de las acciones colectivas y sus ciclos) se decante en este segundo sentido.

Las movilizaciones contra la aprobación del Combo ICE y contra la operación de la empresa española Riteve, fueron ciclos de acción colectiva y no movimientos sociales, es por esta razón que después de las negociaciones y acuerdos alcanzados entre representantes políticos y actores, no se generó una fuerte base organizacional que estuviese en disposición de repensar los logros y las acciones para dar seguimiento al cumplimiento efectivo de las demandas. Esto plantea interrogantes en términos de la ciudadanía que se hace valer de los recursos de la acción colectiva para plantear sus demandas, así como de los alcances y limitaciones de la utilización de los mismos.

Siguiendo este argumento, es importante señalar que poco se conoce de las diferencias existentes en cuanto al impacto político, ya se actúe desde el nivel de la organización o desde el nivel de las prácticas de protesta, con acciones colectivas esporádicas y el establecimiento de alianzas de poca permanencia. De la misma manera, poco se conoce del significado de luchar desde la informalidad o la ilegalidad, condiciones a las que eventuales investigaciones podrían prestar atención.

Por la brevedad del periodo analizado en esta reflexión, no puede concluirse la existencia de grandes cambios en los patrones de protesta social costarricense. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es la importancia que ha adquirido la protesta social -en especial la declaración pública y los bloqueos- en la actual etapa de transición política en la que se encuentra el país. Desde su incipiente utilización masiva en 1983, en el contexto del alza de los servicios de luz ⁽⁴⁰⁾, el bloqueo se ha convertido en uno de los instrumentos centrales de la expresión del malestar con la política, por lo que la evolución histórica del uso del bloqueo y sus resultados, es también una reflexión pendiente.

El análisis de las acciones colectivas realizado no cuestiona el supuesto democrático de la sociedad costarricense. Como señaló Touraine “no hay democracia [...] que no descansa en sobre la movilización de las demandas sociales para tomar conciencia de su realidad colectiva y organizar la defensa de sus intereses e ideas” ⁽⁴¹⁾. La visión de la democracia como sinónimo de estabilidad y ausencia de conflictos, no es más que una falacia. Sin embargo, esta afirmación obliga a pensar en las respuestas que los representantes gubernamentales dan a las demandas planteadas en las acciones colectivas, y a fin de conocer que tan concertadora y negociadora son las prácticas de la democracia costarricense. ¿Qué hace la sociedad costarricense con el conflicto?, es una pregunta que esta reflexión deja abierta.

⁴⁰ Alvarenga, Patricia: 2005 *De vecinos a ciudadanos. Movimientos comunales y luchas cívicas en la historia contemporánea de Costa Rica*. (San Pedro: Editorial de la Universidad de Costa Rica y Editorial de la Universidad Nacional), p. 217

⁴¹ Touraine, Alain: 1984 *El regreso del actor* (Argentina: Editorial de la Universidad de Buenos Aires), p.13

El 02 de mayo de 2002, el artículo 256 bis fue adicionado al Código Penal. De acuerdo a esta reforma, se “impondrá pena de diez a treinta días de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, impidiere, obstruyere o dificultare, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes” ⁽⁴²⁾. Esta reforma, publicada en La Gaceta el 10 de mayo de 2002, empezó a regir el 10 de noviembre del mismo año. Sin embargo, el 2 de setiembre de 2004 el diputado Gerardo Vargas de la fracción del (PAC), propuso el proyecto de ley N° 15691, llamado “Derogatoria del artículo 256 bis y adición de un artículo 390 bis al Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas”, con la finalidad eliminar la penalización con cárcel a la protesta social ⁽⁴³⁾. Prestar atención al uso de esta reforma en el contexto de nuevas protestas sociales permitirá responder que tan autistas o conciliadores son los gobernantes con las demandas expresadas mediante la acción colectiva.

⁴² Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica: 2002 Expediente N° 15691 Derogatoria del artículo 256 bis y adición de un artículo 390 bis al Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas. (San José: Asamblea Legislativa).

⁴³ Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica: 2002 Expediente N° 15691 Derogatoria del artículo 256 bis y adición de un artículo 390 bis al Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas. (San José: Asamblea Legislativa), p. 3